

dica las legítimas facultades de la autoridad judicial, en caso de responsabilidad criminal ó civil.

Considerando: que por otra parte el arraigo no impone obligacion forzosa de permanecer en el lugar designado al efecto, sino la de estar á las resultas del juicio en que se hubiere dictado esa providencia precautoria.

Considerando: que el art. 16 de la Constitucion en la parte que declara que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, se refiere en general á la competencia de las autoridades por razon de las facultades de que estan investidas, y no á la competencia de los tribunales del mismo órden y que gozan de iguales facultades judiciales, solamente limitadas por razon del territorio.

Que en consecuencia, no habiendo alegado el C. Villasescusa que el Juez de 1ª instancia de Guaymas carezca de jurisdiccion para conocer de negocios judiciales de la misma naturaleza que aquel en que se ha dictado el arraigo, ó de decretar esta clase de providencias, que sería el caso del art. 16, sino únicamente que dicho Juez es incompetente en virtud de pertenecer el litigio á la jurisdiccion del de igual clase de la Paz, no cabe el amparo de la Justicia federal por violacion de la garantía invocada.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion de la República, se decreta: 1º: Se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Sonora en 11 de Abril del presente año, que declaró haber lugar al amparo federal en este caso. 2º: La Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Francisco María Villasescusa, contra la providencia de arraigo que dictó en su contra el Juez de 1ª instancia de Guaymas.

Devuélvase los autos al juzgado de su origen, con copia certificada de esta senten-

cia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto 10 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco por el C. José María Ibarra y Leon, contra una disposicion del Ministerio de Hacienda, que declaró improcedente la denuncia que de unas capellanias desvinculadas por el C. Miguel Serratos, hizo el solicitante.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor fiscal dice: D. José María Ibarra y Leon, entabla amparo contra la Gefatura de Hacienda federal en esta Capital, por que trató de ejecutar una órden del Ministerio del ramo, relativa á unas capellanias fundadas por D. Diego y D. Ramon Moncada, sobre los terrenos de "Quimiches y Chilapa" que trató de desvincular D. Miguel Serratos, y que posteriormente y despues de declarada sin efecto la desvinculacion intentada por esto, á causa de no haber hecho el pago que correspondía, tanto por la Gefatura de Hacienda, como por la autoridad judicial en sentencia que causó ejecutoria, ha denunciado como nacionalizadas el Sr. Ibarra y Leon.

Funda el peticionario su recurso, en que resolviéndose por esa órden del Ministerio,

que Serratos no ha perdido sus derechos, y que no procede la denuncia que de las capellanías hizo el Sr. Ibarra y Leon, se atacan en su perjuicio los artículos 14, 27 y 50 de la Constitución.

La Gefatura informa ser exactos los hechos referidos y acompaña como comprobantes tres copias de oficios marcados con los números 1, 2 y 3.

En vista de lo anterior, y considerando el suscrito que positivamente estaba declarado ya, tanto en la vía administrativa como en la judicial por sentencia que causó ejecutoria, que D. Miguel Serratos había perdido sus derechos á desvincular las capellanías de que se trata, cuyas dotes importan siete mil pesos impuestos sobre los ranchos de "Quimichés" y "Chilapa;" que por tal motivo esas capellanías quedaron denunciadas conforme á las leyes de nacionalización; que D. José María Ibarra y Leon las denunció, pidiendo su adjudicación según la ley de 19 de Agosto de 1867 y sus concordantes; que por ese hecho adquirió los derechos correspondientes de que no puede privárselo sino conforme á leyes preexistentes aplicadas en debida forma por autoridades competentes; y que la Orden del Ministerio de Hacienda que trata de ejecutar la Gefatura federal, ha privado de una manera administrativa al Sr. Ibarra y Leon de los derechos referidos, con infracción de los artículos 14, 27 y 50 de la Constitución general.

Con fundamento de los artículos mencionados, y de la ley de 20 de Enero de 1869, el Promotor opina: que la Justicia de la Union debe amparar y proteger al peticionario, contra la Orden del Ministerio de Hacienda de que se queja.

Guadalajara, Febrero 28 de 1874.—Firmado.—A. Camarena.

Es copia. Guadalajara, Febrero 28 de 1874.—A. Camarena.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guadalajara, Marzo 31 de 1874.—Vistos: el C. José María Ibarra y Leon entabló ante este Juzgado, juicio de amparo y protección de garantías, contra una providencia del C. Ministro de Hacienda, comunicada á la Gefatura de Hacienda de este Estado por oficio de fecha 15 del presente año, en la que declara, que se le haga saber como denunciante, que no procede su denuncia del capital de las capellanías desvinculadas por el C. Miguel Serratos, y que denunció conforme á la ley de 6 de Diciembre de 1869; que la resolución del Ministerio de Hacienda le ataca los derechos adquiridos y viola las garantías que le otorga el artículo 14 de la Constitución, en que se dispone que nadie puede ser juzgado sino por leyes anteriores al hecho, y exactamente aplicadas á él por el Tribunal previamente establecido, pues el Sr. Ministro, sin tener el carácter de Tribunal, viene á revocar la sentencia que este Juzgado decidió sobre sus derechos como denunciante; que también se le ataca la garantía del artículo 27, pues tiene derechos anteriores que no se han ventilado judicialmente, y por último se le ataca también en su persona el artículo 50 que prohíbe la reunión en una persona de poderes legislativo y judicial, y que fundado en el artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, entabla amparo contra la Gefatura de Hacienda que trata de llevar á efecto lo destinado por el Sr. Ministro.

Pedido informe justificado al C. Gefe de Hacienda, lo evacuó sin contradecir los hechos en que se funda el C. Ibarra, acompañando tres copias de oficios, uno de remisión de documentos relativos á la devolución que solicitó de las capellanías que disfrutaba el C. Miguel Serratos, y que la Gefatura, con fecha 20 de Agosto de 1862, declaró nacionalizados los capitales que constituyen dichas capellanías, por no haber satisfecho el interesado los derechos

de desvinculacion; otra en que se le piden al mismo Sr. Gefe, la remision de expedientes originales relativos al derecho de desvinculacion, que en concepto de la Gefatura adeuda el C. Miguel Serratos; y la tercera en la que se comunica á la Gefatura de hacienda, haga entender al denunciante que no procede su denuncia, por no haber perdido el capellan sus derechos, en virtud de haber desvinculado en tiempo y no ser legal su propuesta. El C. Gefe de hacienda nada expuso en apoyo de la resolucion del ministerio.

Recibido este negocio á prueba, el interesado exhibió un certificado de la Gefatura de hacienda, que contiene la anotacion que se hizo en la Gefatura el 6 de Setiembre de 1869, del escrito que con fecha 4 del mismo, presentó el C. José María Ibarra conforme á la ley de 19 de Agosto de 1867, denunciando un capital de siete mil pesos que reconocia D. Pedro Solersí, procedente de capellanía; y solicitó que con calidad de devolucion se pidiera á la Gefatura el expediente que obra en ella, para que se compulse testimonio de la comunicacion original del Ministerio, en cuya virtud se obra por esa oficina, contrariando el fallo de la autoridad judicial.

Este Juzgado, considerando 1º: que cuando el C. José María Ibarra denunció el capital de la capellanía que disfrutaba el C. Serratos, ya este capital estaba declarado nacionalizado por la Gefatura de hacienda, por no haber hecho el capellan el pago de desvinculacion prevenido en el artículo 56 de la ley de 5 de Febrero de 1861, pena impuesta con apoyo del artículo 3º de la ley de 30 de Julio del mismo año; 2º: que la Gefatura remitió el denunció del C. Ibarra al Ministerio de Hacienda, donde se admitió disponiendo que prosedieran en la denuncia de que se trata conforme á sus facultades, dando cuenta con el resultado definitivo; y 3º: que D. José María Ibarra, ha contraído derechos por su denuncia y admision, y que una vez disputado, queda

TOMO VI.—PARTE II.

sometida la cuestion á los tribunales, para que la decida con arreglo á las leyes. Así lo dispone de una manera terminante el artículo 23 de la citada ley de 5 de Febrero.

Por tales consideraciones, de conformidad con lo pedido por el C. Promotor fiscal, se falla con las proposiciones siguientes:

Primera: la Justicia de la Union ampara y protege al C. José María Ibarra, contra el acuerdo del C. Ministro de Hacienda en que lo declaró sin derecho á la capellanía que denunció en la Gefatura de Hacienda de este Estado.

Segundo: notifíquese, publíquese por el periódico oficial del Estado y remítase este expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El Juez de Distrito lo sentenció y firmó.
—D. I. Trejo.—G. J. Gallegos.

Es copia. Guadalajara, Abril 9 de 1874.
—G. J. Gallegos.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 11 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco por el C. José María Ibarra y Leon, contra una disposicion del Ministerio de Hacienda que declaró improcedente la denuncia que de unas capellanías desvinculadas por el C. Miguel Serratos, hizo el solicitante. Visto el informe de la Gefatura de Hacienda; los documentos presentados por el promovente; el parecer fiscal; la sentencia del Juez de Distrito, y

Considerando: que el Ministerio de Hacienda no se ha extralimitado en sus facultades con la declaracion de que se queja el C. Ibarra y Leon, pues las leyes sobre la materia le atribuyen en el orden administrativo, la revision y resolucion de esta clase de negocios.

Que no siendo los jueces federales competentes para decidir en un juicio de amparo sobre la justicia intrínseca de la disposicion del Ministerio, solo tocaba al Juez

de Distrito investigara si con ella se invadían las facultades de la autoridad judicial, por que esta hubiese pronunciado ya su fallo definitivo, en cuyo caso habría flagrante violacion de las garantías individuales.

Que el fallo del Juzgado de Distrito en el juicio seguido contra Serratos por el representante del Fisco, sobre devolucion de los títulos que afianzaban la existencia de una capellanía desvinculada por dicho Serratos, no tiene el carácter de definitivo, pues se funda en una declaracion de la Gefatura de Hacienda sujeta, segun la ley, á la revision del Ministerio, y en consecuencia no hubo por parte de este invasion de las facultades judiciales.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, se declara: que es de revocarse y se revoca la sentencia del Juez de Distrito que concedió el amparo al C. José María Ibarra y Leon, contra un acuerdo del Ministerio de Hacienda.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toea.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los Sres. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, Mayo 13 de 1874.—*Lic. Emilio Ordás,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco por los Sres. Romano Hermanos, contra el cobro que les hace la Receptoría de Rentas de San Juan Bautista, del impuesto de un 6 por ciento sobre los derechos de importacion que han causado los efectos descargados en el Puerto de la Frontera, por la Barca inglesa "Belle of the Niger."

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: Por espaciosas que sean las razones alegadas y que puedan alegarse en pro del cobro de la contribucion de que se quejan los Sres. Romano Hermanos, mientras la imposicion ó el establecimiento de ese cobro no se presente acompañado de la constancia respectiva, de haberse cumplido con el requisito que para poder hacerlo exige á los Estados el artículo 112 de la Constitucion de la República en su fraccion 1ª, el que suscribe no podrá pedir otra cosa que el cumplimiento de ese artículo, por que á esto lo obliga el 126 de la misma Constitucion en su parte final, diciendo: "Los Jueces de cada Estado se arreglarán á dicha Constitucion, leyes y tratados, (los que deja establecidos por ley Suprema de toda la Union) á pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones ó leyes de los Estados." Este precepto hará desvanecer cualquiera duda; mas puede añadirse que la derogacion de los arts. 19 y 83 del Arancel de Aduanas Marítimas de que hace tanto mérito la Receptoría, en nada tocó ni podía tocar tanto al testo constitucional, por que este no puede ser tocado, reformado ó adicionado por una ley secundaria, sino por otra que haga parte de la misma Constitucion, previo el concurso de las personas, corporaciones y requisitos señalados en su art.